



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).



SinDerivadas — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

Régimen de responsabilidad penal contra menores de edad en Colombia - Regime of criminal responsibility against minors in Colombia*

Angie Julieth Bustos Morales**

Universidad Católica de Colombia

Resumen

En el siguiente artículo se da a conocer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes el cual es un conjunto de normas y procedimientos jurídicos al que debe estar sometido un adolescente de 14 a 18 años que infrinja la ley penal colombiana, sin olvidar que los niños, niñas y adolescentes también tienen derechos establecidos en la normatividad colombiana como lo son el derecho a la rehabilitación y resocialización mediante programas que deben ser brindados por el Estado, dichos programas deben tener en cuenta los factores económicos, familiares, sociales y culturales en los cuales los jóvenes se ven envueltos para la comisión de los delitos, esto con el fin de poder brindar un mejor tratamiento y lograr que los jóvenes no incurran en la reincidencia del delito. Además, en el artículo muestra el avance histórico del sistema penal colombiano a la hora de abordar delitos cometidos por niños, niñas o adolescentes para poder determinar si el régimen de responsabilidad penal contra niños, niñas y adolescentes ha tenido un avance legislativo. Por último, se mostrarán los vacíos jurídicos existentes dentro del sistema de responsabilidad penal para niños, niñas y adolescentes además de realizar una comparación entre el sistema penal colombiano con el sistema penal que manejan algunos países latinoamericanos para poder comprender las similitudes y diferencias y poder así mejorar nuestro sistema penal.

Palabras Clave: Régimen, sanción, exclusión, penal, responsabilidad, inimputabilidad, niño, niña, adolescente.

* Artículo de investigación presentado como requisito para optar al título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia, bajo la asesoría de Jesús Enrique Archila Guio, docente de la facultad de Derecho

** Estudiante en proceso de grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, identificado con código estudiantil 2110794 y correo electrónico ajbustos94@ucatolica.edu.co

Abstract

The following article describes the System of Criminal Responsibility for Adolescents, which is a set of rules and legal procedures to which an adolescent between 14 and 18 years of age who violates Colombian criminal law must be subjected, without forgetting that boys, girls and adolescents also have rights established in Colombian law, such as the right to rehabilitation and resocialization through programs that must be provided by the State, These programs must take into account the economic, family, social and cultural factors in which young people are involved in the commission of crimes, in order to provide better treatment and ensure that young people do not reoffend. In addition, the article shows the historical progress of the Colombian criminal system when dealing with crimes committed by children or adolescents in order to determine whether the regime of criminal responsibility against boys, girls and adolescents has had a legislative progress. Finally, it will show the existing legal gaps within the system of criminal responsibility for boys, girls and adolescents, in addition to making a comparison between the Colombian criminal system and the criminal system used in some Latin American countries in order to understand the similarities and differences and thus be able to improve our criminal system.

Key Words: Regime, sanction, exclusion, criminal, responsibility, imputability, boys, girls, adolescents.

Sumario

Introducción, 1. Antecedentes, 1.1. Conceptos sobre la infancia, 1.2. Modelos jurídicos, 1.2.1. Modelo jurídico-tutelar, 1.2.2. Modelos jurídico garantista. 1.3. Paradigmas dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 1.3.1. Paradigma clásico, 1.3.2. Paradigma de la situación irregular, 1.3.3. Paradigma de la protección integral, 2. Corresponsabilidad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 2.1. Familia, 2.2. Sociedad, 2.3. Estado, 3. Factores que influyen en los conflictos de adolescentes, 3.1. Factor individual, 3.2. Factor social, 3.3. Factor de inclusión, 4. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia, 4.1. Autoridades y entidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia, 4.2. Código de infancia y adolescencia, 4.2.1. Diferencia entre el régimen anterior y el régimen actual, 4.3. Exclusión de la responsabilidad, 4.4. Procedimiento penal, 4.4.1 Actores dentro del proceso, 4.4.2. Audiencias preliminares, 4.4.3. Audiencias de conocimiento, 4.5. Sanciones, 4.5.1. Clases de sanciones, 5. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en América Latina, 5.1. Argentina, 5.2. Chile, 5.3. México, 6. Falencias dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 7. Conclusiones, 8. Referencias.

Introducción

A comienzos del siglo XX, no existían ningún tipo de norma que brindara protección para los niños, niñas y adolescentes, por lo que estos trabajaban como adultos en condiciones insalubres y peligrosas, además de las prácticas de exterminio adelantadas en la época, se empezó a evidenciar y a reconocer las injusticias y las necesidades de desarrollo que tenían los niños, niñas y adolescentes motivo por el cual se empezó a defender los derechos de estos, puesto que son considerados el futuro de la humanidad, estas protecciones dadas hacia los niños, niñas y adolescentes se desarrollaron para preservar mejores posibilidades a la sociedad en general, por lo tanto no podían seguir considerándose solamente derechos si no que pasaron a ser obligaciones que contraían los adultos con todos los niños, niñas y adolescentes, los cuales traerían diferentes consecuencias por su incumplimiento (Moya & Bernal, 2015, p 9 - 10).

Cabe mencionar que en cualquier Estado que realice alguna modificación sea parcial o totalmente de su Constitución Política, deberá saber que esto implica un cambio estructural en las instituciones que tenga dicho Estado, esto con el fin de dar cumplimiento a los fines y objetivos de la Constitución. Por lo tanto, cuando Colombia entra a ser un Estado Social y Democrático de Derecho, no solo realizó un cambio en los objetivos y fines estatales, sino que planteó nuevos medios para cumplirlos, uno de los principales cambios que trajo la Constitución Política de 1991 y que nos atañe para lo que se va a desarrollar en este artículo, es la protección especial y superior de los derechos de los niños, dejándola como un derecho fundamental (Ruiz, 2011, p. 338).

Pero la ideología de inocencia de los niños, niñas y adolescentes no era de todo correcta y no iba con la realidad, por lo que los niños, niñas y adolescentes también cometían delitos graves, aunque se tenía la idea que donde un niño, niña o adolescente cometía delitos era por la determinación de un adulto o porque este había creado las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes delinquieran (Moya & Bernal, 201, p. 10).

Al pasar el tiempo la violencia y las conductas delictivas realizadas por adolescentes fueron aumentando, debido a diferentes factores sociales, económicos y culturales, es por esta razón que se implementó en el año 2006 el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente, como sistema que regulan las conductas delictivas de niños, niñas y adolescente, esto mediante la Ley 1098 de 2006 la cual pretende dar solución a todos los conflictos donde el sujeto infractor sea un niño, niña o adolescente (Hadechini, 2016, p.7-8).

Se puede evidenciar algunas contradicciones en algunos casos, por la cantidad de normas que regulan el tema, además de las modificaciones existentes al tratamiento dado a los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley, dichas modificaciones se han realizado tanto en normas nacionales como internacionales, cabe resaltar que aún no existe una norma que sea lo suficiente específica y concreta para abarcar toda la problemática que se desarrolla alrededor de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley, esto quiere decir que existen vacíos sobre como regular este asunto. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p. 19).

La norma establece mecanismos y políticas para que los niños, niñas y adolescentes infractores puedan reincorporarse a la sociedad después de haber cumplido con la sanción correspondiente al delito cometido, sin dejar a un lado la protección especial brindada a los niños, niñas y adolescentes, por lo cual durante y después de cumplida la sanción correspondiente al delito se le garantizará sus derechos fundamentales, porque se le debe brindar protección total tanto a la víctima como al victimario y más si este es menor de edad. Es por esto que los mecanismos propuestos por la norma buscan el diálogo entre las personas en conflicto, la reparación de las víctimas, la reintegración de los victimarios y la inclusión de la comunidad, esto con el fin de disminuir la reincidencia de los niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos, aunque aún se tienen vacíos para cumplirlos con total satisfacción, puesto que muchos de los niños, niñas y adolescentes reinciden en actividades delictivas (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p. 11-21).

Es con la Ley 1098, que se añadió la corresponsabilidad (Familia, Sociedad, Estado), para los casos delictivos donde un niño, niña o adolescente es el infractor de la Ley, además que modificó todo el procedimiento penal, teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes

cuentan con derechos superiores a los de un adulto, por lo que el juzgamiento de un niño, niña o adolescente deberá ser diferenciado al de los adultos, por lo que se creó un subsistema penal para los niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar que la nueva normatividad no ha logrado disminuir los índices delincuenciales juveniles, ni bajar la reincidencia de estos por lo que se evidencia falencias en la aplicación de esta norma y lo que se establece en ellas (Moya & Bernal, 2015, p. 10-11).

Además, se implementa para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal el mecanismo de justicia restaurativa, el cual intenta establecer métodos de restauración por medio de diálogos con el niño, niña o adolescente para concientizarlo de los actos realizados, reparación de las víctimas y por último que se dé la inclusión social. Todo esto se realiza con el fin que el niño, niña o adolescente pueda restaurar los vínculos familiares y sociales después de la realización de un delito (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 102).

La justicia restaurativa tiene una gran importancia por tanto intenta abordar en su totalidad el conflicto, pues le da participación activa a las víctimas, además se pretende reparar a estas por el daño cometido, fomenta el encuentro entre las partes que se encuentran en conflicto, busca el cambio de conducta de los niños, niñas y adolescentes infractores y por último incluye a las autoridades competentes para estos casos, la familia del niño, niña o adolescente brindándoles acompañamiento y diferentes talleres para mejorar el vínculo entre el núcleo familiar y el niño, niña y adolescente y así mismo mejorar la convivencia, por ende también incluye a la comunidad en general para que así se logre generar la inclusión social y el niño, niña y adolescencia pueda tener una mejor calidad de vida, sin ser juzgado por la sociedad por los delitos cometidos. Es por esto por lo que la justicia restaurativa aporta soluciones para la problemática que vive el país con los niños, niñas y adolescentes responsables penalmente (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 92).

Conforme a lo aquí mencionado, debe resaltarse que el método empleado en este artículo es el dogmático jurídico, toda vez que la investigación se basa en la evolución normativa del Sistema de Responsabilidad Penal aplicado a los adolescentes en Colombia desde el

surgimiento del Código Penal de Santander en 1837 hasta la Ley 1098 de 2006, conocido como Código de Infancia y Adolescencia, para posteriormente contrastarlo con el existente en algunos países de América Latina, logrando la recopilación de una serie de conceptos, procedimientos y diferencias en los regímenes legales estudiados que permitan al lector efectuar un análisis práctico histórico-normativo.

1. Antecedentes

1.1. Conceptos sobre la infancia.

Desde la aparición de la Convención de los Derechos del Niño, se dio a conocer el concepto “niño” el cual se definió como todo ser humano menor de 18 años, posteriormente apareció la Ley 1098 de 2006, donde se modificó el concepto de niño donde se definió como todo ser humano menor de 14 años y se añadió el concepto de adolescente el cual fue definido como toda persona entre los 14 y 18 años, los cuales se encuentran sujetos a derechos y obligaciones.

Las definiciones sobre el concepto de niño y otras definiciones que se encuentran entorno a la infancia no siempre han sido las mismas, al pasar de los años estas se han modificado gracias al proceso de construcción social (Acuña. 2008, p. 25).

Cabe mencionar que los niños niñas y adolescentes no siempre han gozado de derechos y obligaciones como es el caso de la antigua Roma, donde los recién nacidos se exponían ante las puertas del palacio imperial y los que no eran elegidos por las personas, serían posteriormente asesinados, esta práctica cumplía las mismas funciones actuales que el aborto es en este momento que se empieza a rechazar el infanticidio, por lo que en el siglo XVI, se empieza a tener conciencia sobre el concepto de infancia como seres que necesitan protección (García. 1998, p. 22).

Este problema sobre el significado de los términos referentes a la infancia, también se evidencia en la Edad Media como lo explicaba en el estudio sobre la niñez que realizó Ariès donde expresaba que la niñez no existía tal y como se entiende hoy en día, por lo que no se consideraban sujetos de derecho y se entendía como niños a todo sujeto que se mantuviera bajo la guarda y dependencia de la crianza sin tener en cuenta la edad, se pasaba a ser adulto solo cuando la persona se desprendiera totalmente de la guarda y cuidado de sus padres, es así que él bebe se convertía en un hombre joven y jamás pasaba por las etapas que existen hoy en día las cuales son la niñez y la adolescencia (Ariès, 1987, p.20-25).

Posteriormente en la edad moderna, se vivía la cultura de internamiento donde se crean instituciones cerradas para solucionar cada problema social existente, es por esto que finalizando el siglo XVIII se crea la escuela, para tener una educación bajo el modelo de aislamiento, haciendo que la familia se organice en torno al niño. Con el paso del tiempo, cada vez más se fortaleció el sentimiento de protección y cuidado hacia el niño, haciendo la vida familiar mucho más amena para los niños, niñas y adolescentes logrando así disminuir el infanticidio (Ariès, 1987, p. 15 - 18).

Se expide en el año 1989 el Código del Menor el cual tiene como objetivo consagrar los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, determinar los principios que orientan la protección del niño, niña y adolescente que se encuentra en una situación irregular esto con el fin de poder corregirlas (Decreto N° 2737, 1989, p. 1).

Para el siglo XX se empezó a dar la categoría de menores y estos se empezaron a tratar con cuidado y protección, es por esto que se empezaron a implementar leyes como la Ley 1098 del 2006 donde se crearon procedimientos acordes con el término de infancia tanto para protegerlos como para sancionarlos en los casos que sean necesarios (Holguín, 2010, p. 291 - 292).

Se puede evidenciar que las definiciones en torno a la infancia tuvieron modificaciones a través del tiempo dándole cada vez una importancia más grande a las protecciones de los niños, niñas y adolescentes generando una mejor calidad de vida para estos, es así que también se crean modelos jurídicos que a través del tiempo se van acoplando tanto a los derechos como a las obligaciones que tiene el niño, niña y adolescente.

Para finalizar podemos decir que la Ley 1098 de 2006 trajo muchas innovaciones en cuanto a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes como se hallan consagrados en el tratado internacional de Derechos Humanos ratificado en Colombia, se creó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en los niveles nacionales, departamentales, distritales y municipales, pero cabe recalcar que los niños, niñas y adolescentes no son exclusivamente

responsabilidad del Bienestar Familiar si no de todas las autoridades, la sociedad y la familia (Vargas, 2006, p. 1 - 11).

1.2. Modelos Jurídicos

En el siglo XIX, en el ámbito internacional, cuando un menor de edad infringía la ley penal no se contaba con ningún procedimiento diferente al aplicado a los adultos, sin tener en cuenta que los niños, niñas y adolescente no tienen el mismo desarrollo ni físico ni psíquico que los adultos, y solo se les otorgaba un tutor para que este los representara dentro del proceso penal (Holguín, 2010, p 291).

Posteriormente en el siglo XX con los cambios sociales importantes que ocurrieron y que ayudaron a la transformación de la sociedad, se desaprobó todo tipo de violencia en contra de los grupos sociales esto con el fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes (Moya & Bernal, 2015, p. 10).

A partir de este momento se consideró que los niños, niñas y adolescentes deberían ser cuidados y protegidos por los adultos, pero se evidenció que la inocencia que se decía que tenían todos los niños, niñas y adolescentes no eran totalmente ciertas ya que estos también infringen la ley.

Posteriormente, a nivel internacional, se dio la creación del Derecho de Menores el cual se puede dividir en dos fases: la primera inició con la creación del primer Tribunal Juvenil en el año de 1899 y se dio la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989 y la segunda está basada en el modelo jurídico- garantista que inicia con la vigencia de la CIDN. Motivados por el desconocimiento de los derechos de los niños se decidió sacar a los niños, niñas y adolescente del sistema penal para adultos y así es como surge el Tribunal Juvenil de Chicago en 1899, el cual tuvo una gran influencia en toda América Latina provocando cambios en el Derecho de menores y proponiendo un procedimiento penal diferente para los infractores que fueran menores de edad, esto con el fin de salvaguardar los

derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes los cuales son otorgados por la Constitución Política Colombiana (Sarmiento, 2008, p. 48).

1.2.1. Modelo jurídico-tutelar

A partir del año 1899 comienza un sistema de justicia penal conocido como tutelar, centrado en considerar al niño, niña y adolescente como incapaz e indefenso, bajo la idea de que el desarrollo físico como psíquico de los niños, niñas y adolescentes, no les daba la capacidad de comprender la ilicitud que pudieran cometer (Sarmiento, 2008, p.48 - 49).

Para Sarmiento (2008, p. 52) el Estado debería proveer la función protectora en situaciones de abandono, violencia o pobreza, poniendo al niño, niña y adolescente como un objeto de compasión y no como sujeto de derechos, esto trajo como consecuencia la llamada protección restrictiva donde no se diferenciaba entre niños, niñas y adolescentes abandonados de los delincuentes.

Esto generó medidas para solucionar las dificultades en las que aparecían involucrados los niños, niñas y adolescentes, donde se disponían de internaciones por carencia de recursos, convirtiéndose en privaciones de la libertad (García, 1998, p.72-86).

Para fines del siglo XIX, por medio de la creación de legislaciones se le brinde una protección para los niños, niñas y adolescentes que sean infractores de la ley, para así brindarles un tratamiento diferente al de un adulto, estas ideas de protección también conocidas como la Doctrina de la Situación Irregular no solo busca la protección de los niños, niñas y adolescentes infractores, también para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de abandono, en situación de riesgo y cualquier situación que pudiera estar en condiciones donde se desencadenan comportamientos delictivos (Zeledon, 2015, p. 4).

En consecuencia para el ámbito tutelar los niños, niñas y adolescentes son vistos como vulnerables, con un riesgo social por lo que el Estado toma una posición paternalista para la protección de los niños, niñas y adolescentes esto bajo políticas de control, llegando a

medidas drásticas en casos específicos como separarlos de su entorno familiar con el fin de protegerlos (Zeledon, 2015, p. 5).

En conclusión, se puede decir que, para el modelo jurídico-tutelar, los menores de dieciocho años se denominan con el término menor y son considerados incapaces, puesto que tienen una dependencia tanto de los padres como del Estado, dejándolos como inimputables ante la ley penal, además que este modelo no se encuentra dirigido a toda la población si no solo a los niños, niñas y adolescentes que tengan dificultades o riesgos (Sarmiento, 2008, p.48- 49).

1.2.2. Modelo jurídico garantista

Como consecuencia del modelo jurídico tutelar, se produjeron varias violaciones a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes por lo que se buscó un mecanismo de protección integral. Es por esto que se creó la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (CIDN), como parte de una política de justicia social que esta direccionada a lograr orden y paz en la población mundial, donde consideran al niño sujeto de derechos y se logra consolidar tanto derechos como responsabilidades por los actos ilícitos que el niño, niña o adolescente pueda cometer, sin dejar de respetar sus garantías procesales que por su condición de edad lo amerita y se establece un procedimiento de juzgamiento adecuado (Sarmiento, 2008, p. 49-50).

Además se expidieron diferentes reglas internacionales que trataban los requisitos que se deberían cumplir para privar de la libertad a un niño, niña o adolescente que hubiese incurrido en la comisión de un delito, teniendo en cuenta las garantías del debido proceso y los derechos de los niños, niñas y adolescentes infractores. Es así que por medio de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (CIDN) se promovieron diferentes leyes, procedimientos e instituciones con el fin de atribuir una responsabilidad a todo niño, niña o adolescente que cometiese un delito, respetando en todo momento sus derechos fundamentales (SCJN & UNAM, 2009, p.15-17).

Es hasta el siglo XXI que Colombia se adaptó a esta tendencia y surgió la Ley 1098 de 2006 donde se integró el principio de protección y corresponsabilidad social, puesto que con esta ley todo el sistema penal tuvo un impacto, además se tuvo que crear un subsistema para lo que concierne con los menores de edad (Moya & Bernal, 2015, p.27-30).

El Código Penal vigente a diferencia del anterior no pone al niño, niña y adolescente como inimputable, si no que se encuentra sujeto al régimen penal correspondiente es decir las normas establecidas dentro de la Ley 1098 de 2006 en el cual define al sistema de responsabilidad penal de adolescente (SRPA) como el conjunto de normas, principios y procedimientos que rigen el juzgamiento de los delitos penales cometidos por personas menores 18 años, dejando un vacío normativo grande puesto que se puede decir y basándose en lo establecido en la ley 1098 que los menores de 14 años no pueden ser penalmente responsables (Moya & Bernal, 2015, p. 31- 45).

Además, la situación socio-jurídica de los niños, niñas y adolescentes no solo es un asunto exclusivo de la familia sino además es responsabilidad del Estado y la Sociedad puesto que los tres deben garantizar cuidado, protección y atención a todo menor de edad. Cabe tener en cuenta que conforme a lo establecido dentro de la Ley 1098 de 2006 un menor de 14 años que cometa un delito penal, solo se le aplicaría medidas de verificación de las garantías de derechos y su restablecimiento además de ser vinculado a procesos de educación y protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, puesto que cabe mencionar que en Colombia un menor de 14 años no tiene la capacidad de tomar sus propias (Hadechini, 2016, p. 12).

En conclusión, para este modelo jurídico se considera que un niño, niña o adolescente es capaz de realizar conductas típicas, antijurídicas y culpables por lo que este puede ser objeto de la aplicación de una sanción o medida correctiva, pero cabe mencionar que el procedimiento para este tipo de casos donde el sujeto infractor es un niño, niña o adolescente se diferencia con el esquema de los adultos ya que la culpabilidad es disminuida por la situación síquica y mental de los niños, niñas o adolescentes, es decir, que los mayores de 14 años hasta los 18 años de edad son imputables puesto que estos comprenden la ilicitud de su

acción y tienen la capacidad de determinar la conducta mientras que los menores de 14 años son inimputables y se deben tomar otras medidas correctivas para ellos (Martínez, 2015, p.7-9).

1.3. Paradigmas dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

1.3.1. Paradigma clásico.

Se encuentra influenciado por la Escuela Clásica del Delito, donde el libre albedrío es el fundamento de una conducta ilícita realizada por un ciudadano, cabe resaltar que para la época de este paradigma que es entre 1837 y 1919, se consideraba que los niños, niñas y adolescentes no contaban con un libre albedrío, pues no contaban con los requisitos de este que era la voluntad y la inteligencia libre. (Holguín, 2010, p. 294).

Se puede evidenciar el uso de este paradigma en los tres códigos penales que ha tenido Colombia, es por esto que se realizará una explicación sobre estos códigos, y su influencia con el paradigma clásico.

✓ Código de Penal de Santander (1837)

Según el artículo 106 de este código, los menores de 7 años no eran sujetos de ninguna pena, es decir, eran inimputables, basados en la falta de capacidad para comprender y actuar de una forma libre, puesto que la inteligencia y capacidad de comprender para esa época se basaba en su edad (Código Penal, 1837).

Los menores de edad entre 7 años y los 10 años y medio tampoco recibían una pena, solo se implementa una medida correctiva que para la época era velar porque los padres cumplieran con la obligación de cuidar, educar y corregir a dicho niño, niña o adolescente y si estos no se encontraban capacitados para esto por alguna razón los niños, niñas o adolescentes serían enviados a una casa de reclusión por el tiempo que fuere necesario. (García & Carranza, 1990, p.43-47).

Para los menores entre los 13 años y 18 años estaban en obligación de dar cuenta de sus actos y llegaban a tener responsabilidad, pero esta era disminuida y como para esta época los niños, niñas y adolescentes no contaban con un sistema penal especializado para ellos, estos infractores eran sometidos a los mismos procesos que los adultos (Holguín, 2010, p. 294 - 295).

✓ **Código Penal del Estado de Cundinamarca**

En este código se excusa también la responsabilidad de los menores de 7 años y se mitiga las penas que ya imponía el Código de Santander dejándolas de la siguiente manera, los menores de 17 años que comentan un delito que merezca pena de muerte, los adolescentes serán condenados a 15 años, los niños, niñas y adolescentes que comentan un delito donde la pena sea la exclusión del territorio serán condenados por el mismo tiempo para ser confinados, los menores que se encuentran entre los 7 y los 12 años no sufrirán de pena, pero serán enviados a casa de reclusión, para ser corregidos hasta que cumplan los 17 años (García & Carranza, 1990, p.36-41).

✓ **Código Penal de 1890**

Este código deja igual a los menores de 7 años no son penalmente responsable, a los menores de 12 años y mayores de 7 años serán entregados a sus padres para que estos le brinden la educación y lo corrijan de una forma conveniente y si estos no pueden hacerse cargo de la educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes, éstos serán entregados a una casa de reclusión por un tiempo que no supere que estos cumplieran la mayoría de edad (García & Carranza, 1990, p.51-60).

1.3.2. Paradigma de la situación irregular.

Este paradigma estuvo presente entre el año 1920 hasta el 2006 está influenciado por la escuela positivista del derecho penal, acá no se juzga a una persona por el libre albedrío para cometer un delito, se sanciona los comportamientos y hábitos de la persona para cometer el

delito y por estas razones se convierten en un peligro para la sociedad, pero las condiciones deplorables de la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes, generó un repudio moral lo que generó reformas (Holguín, 2010, p. 296 - 297; García & Méndez, 1994, p.18-23).

Se puede decir que este paradigma implementado por las reformas realizadas por el repudio moral que generó las condiciones deplorables a las que estaban siendo sometidos los niños, niñas y adolescentes que incurrían en un delito, se enfocó en la vulnerabilidad de los menores de edad, es decir aquellos niños, niñas y adolescentes con carencias económicas o que se encontraran en un peligro o riesgo de abandono ya sea material o moral, lo que genera un trato especial para la protección de los menores de edad de cualquier situación de desamparo, es por lo que el Estado pasa a tener la tutela de estos para garantizarles una seguridad (Acosta, 2016, p. 6-9; Fariás, 2013, p. 5-6).

Este paradigma se desarrolló en Colombia mediante la Ley 98 de 1920, el Código Penal de 1936, el Código Procesal Penal de 1938, la Ley 83 de 1946, el Decreto 409 de 1971 y el Código del Menor.

✓ Ley 98 de 1920

Por medio de esta se creó la primera jurisdicción especializada para los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en estado de abandono físico, moral o por vagancia y carencia de medios de subsistencia. En estos casos el juez penal intervenía y las medidas para estos niños, niñas y adolescentes eran las mismas que para los que hubieran infringido la ley, por lo que se violaba el principio de legalidad porque no hay un delito ni pena si la ley lo define (García & Carranza, 1990, p.27-32).

Por lo que se crearon los juzgados especiales para los niños, niñas y adolescentes, cumplían funciones médicas y psicológicas, ya que el juez debía estar informado sobre las condiciones en las que se encontraban el niño, niña y adolescente para así poder adelantar las etapas del proceso (Holguín, 2010, p.297).

La Ley 98 de 1920 fue creada para establecer una nueva jurisdicción separada al de los mayores de edad para juzgar a los niños y niñas entre los 7 y los 10 años de edad que hubiesen cometido algún delito establecido en el Código Penal o en el Código de Policía esto bajo la jurisdicción del Juez de Menores, además creó las bases para la protección y preservación de los niños niñas y adolescentes entre los 7 y 16 años de edad, se imponían sanciones de un listado determinado sin importar la gravedad del delito (Ley 98 de 1920).

✓ Ley 95 de 1936

Por medio de la Ley 95 de 1936 fue la primera codificación penal del siglo XX, en esta ley se estableció las generalidades de los delitos, la responsabilidad que generaban los delitos, la reincidencia, el concurso de delitos, las sanciones entre otras cosas, para el caso de los niños niñas y adolescentes se estableció que los niños y niñas de diez y ocho años que incurran en algún delito se le aplicarían las medidas de seguridad que se encuentran en el Capítulo II del Título II (Ley 95 de 1936, Art. 30).

Ya no se busca defender la moral y la religión, si no que busca la defensa social, esto quiere decir, que se busca proteger a la sociedad en general, alejándose de todo lo que no conoce o sea considerado peligroso, por lo que por medio de instituciones el niño, niña y adolescente se educa con este fin. Se empieza a tener en cuenta las medidas de seguridad para mirar el nivel de peligrosidad de las actividades que ejecutan los niños, niñas y adolescentes, no se buscaba un castigo sino un mecanismo de defensa para la sociedad (Holguín, 2010, p 297).

✓ Ley 83 de 1946

Por medio de la Ley 83 se empezó a proteger al niño, niña y adolescente aumentando la edad hasta los 18 años y desapareció la edad mínima puesto que se pretende salvaguardarlos, además esta ley también decreta la jurisdicción de menores, donde establece que los niños y niñas de diez y ocho años que incurrieran en una infracción de la ley penal o que se encuentren en estado de abandono o de peligro ya sea físico o moral serán sometidos a las medidas de asistencia y protección que la misma ley determina (Ley 83 de 1946).

Se empezó a defender al niño dentro de la sociedad, cambiando el termino de casa de menores y correccionales a establecimiento de educación. Y se implementaron los jueces menores civiles y jueces menores penales encargados de llevar la atención a la sociedad y no solo al niño, niña y adolescente, ya que se fundamenta en la defensa de la sociedad de los niños, niñas y adolescentes que son infractores (Holguín, 2010, p. 297 – 298).

✓ Código del Menor (Decreto 2737 de 1989)

Por medio del Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor tenía como objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes sus derechos fundamentales, por lo cual define y establece la protección integral de los derechos regulando la relación del Estado, la sociedad y la familia con los niños , niñas y adolescentes desde su nacimiento hasta cumplir la mayoría de edad establecida en el país, por medio de este decreto se estableció claridad en el concepto de niño, niña y adolescente definiendo a niño o niña a toda persona desde su nacimiento hasta los 12 años y adolescente toda persona desde los 13 hasta los 18 años (Decreto 2737 de 1989).

Además este Decreto establece las normas para llevar el proceso administrativo e cuanto a la protección del adolescente infractor basándose en la situación irregular por lo que se crean las comisarías de familia y las defensoría, creando obligaciones y derechos como la cuota alimentaria y la patria potestad entre otros (Decreto 2737 de 1989).

Bajo la doctrina de la situación irregular se ubica al niño, niña y adolescente como inimputable por ser considerado una persona que no es capaz de comprender la ilicitud de las conductas que realiza, por lo que solo se imponían medidas de seguridad por su falta de madurez psicológica (Holguín, 2010, p. 298).

Es por esto que los niños, niñas y adolescentes infractores se les brindara medidas de protección y rehabilitación pedagógicas, medidas que en lo posible deberían ser cumplidas en el medio familiar o dentro de la jurisdicción al que perteneciera el niño, niña o adolescente esto con el fin de inculcarle valores, (Decreto 2737 de 1989, Art. 204).

1.3.3. Paradigma de la Protección Integral

La Convención de Derechos del Niño constituye el marco de reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque contemplo la necesidad de respetar, proteger y realizar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de discriminación generando así una protección integral, puesto que el Estado debe garantizar el respeto y la protección de los derechos, además de adoptar medidas que sean apropiadas para la efectividad de los derechos (Cardozo & Michalewicz, 2017, p. 2-3).

A diferencia del paradigma de la situación irregular visto anteriormente en este paradigma se buscó la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en general a través de un Estado promotor de derechos tanto para los menores de edad como para la familia y la sociedad (García Méndez, 1994, p. 43-46).

Este paradigma es el que se encarga de inspirar la Ley 1098 de 2006, donde se establecen políticas integrales que primero se logre la corrección del niño, niña y adolescente dentro de un ámbito legal, donde se le den a conocer las consecuencias de sus actos, sino que también se logre restituir los derechos de los que son merecedores por el hecho de ser persona y aún más por ser menor de edad, todo esto bajo sanciones pedagógicas (Holguín, 2010 p. 298-299).

La Ley 1098 o Código de Infancia y Adolescencia surge como resultado de un consenso universal que reconoce a los niños niñas y adolescentes como personas autónomas con derechos y responsabilidades, por lo cual esta ley busca que además de proteger de manera integral los derechos que poseen los niños, niñas y adolescentes también se hagan responsables por los delitos que estos hubiesen cometido, teniendo en cuenta que se debe realizar un proceso diferenciado al de los adultos en el cual se les garantice el debido proceso y el derecho a la defensa, dicho proceso debe tener un carácter pedagógico teniendo en cuenta que se debe restituir los derechos tanto a la víctima del delito como al infractor (Ley 1098 de 2006).

2. Corresponsabilidad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes

La Ley 1098 de 2006 consagra el principio de corresponsabilidad, puesto que la situación socio jurídica de los niños, niñas y adolescentes no es un asunto exclusivo de ellos, sino que además es un asunto que le corresponde tanto a la familia como a la sociedad y al Estado. Estos tres se encuentran vinculados en la satisfacción y deben iniciar las acciones pertinentes en cuando sea necesario (Moya & Bernal, 2015, p.31-45).

De acuerdo al artículo 38 de la Ley 1098 de 2006 estableció que la familia, la sociedad y el Estado tienen obligaciones de nivel tanto nacional como departamental, distrital y municipal con todo lo concerniente a la protección del niño, niña y adolescente dando además unos parámetros y obligaciones a cada uno sobre sus deberes con los niños, niñas y adolescentes.

Además, se debe tener en cuenta que cuando el que infringe la ley penal es un niño, niña y adolescente se entra a establecer las causas por las que este realizó el acto delictivo y si se encuentra una relación de causación donde se demuestre que el niño, niña y adolescente infringió la ley porque alguna entidad ya sea la familia, la sociedad o el Estado incumplió con alguna obligación con este, es probable que la responsabilidad penal caiga sobre quien incumplió alguna de sus obligaciones con el niño, niña y adolescente. Es decir, que la corresponsabilidad hace que algunos de los niños, niñas y adolescente sean vistos ante la ley como víctimas (Convenio 661, 2013, p. 5; Moya & Bernal, 2015, p.31-45).

2.1. Familia

La familia es la promotora de afecto, solidaridad y respeto entre los integrantes, es la primera institución en la que los niños, niñas y adolescentes aprenden sobre la ilicitud y la licitud de los actos y es el lugar donde se forman los valores, puesto que es una figura demasiado importante para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, se generó imputación penal para cualquier tipo de violencia que pueda ocurrir dentro de la familia. La familia, es la principal encargada de proveer todo lo necesario para que estos tengan un buen desarrollo

tanto físico como psíquico y también se convierte en garante del niño, niña y adolescente, respondiendo por cualquier lesión que sufra el niño, niña o adolescente. Posteriormente la Ley aclaró que estarían llamados a responder los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes que incurran en la violación de algún delito (Ley 1098 de 2006, Art. 39).

2.2. Sociedad

Mediante el artículo 40 de la Ley 1098 de 2006 se establecen las obligaciones que debe cumplir la sociedad frente a los niños, niñas y adolescentes. Cabe, aclarar que se entiende a la sociedad como a las organizaciones como asociaciones, empresas, gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales. Dichas organizaciones mencionadas anteriormente, deben procurar la protección inmediata ante hechos que amenacen los derechos de los demás. Es decir, que están en la obligación de denunciar cualquier tipo de delito que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Moya & Bernal, 2015, p.31-45).

Pero a pesar que estas obligaciones son en forma general para toda la sociedad la Ley 1098 fija obligaciones especiales por ejemplo para entidades educativas ya que se les exige garantizar el acceso a todos los niños, niñas y adolescentes, brindarles una buena educación y no exista ningún tipo de discriminación por sexo, etnia, religión o condición socioeconómico (Ley 1098 de 2006, Art. 44).

Al igual que a las entidades educativas se les dio obligaciones especiales también se le dio al sistema de seguridad social en salud, a los medios de comunicación y a la comisión nacional de televisión, esto con el fin de mejorar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006).

2.3. Estado

Por medio del artículo 41 de la Ley 1098 se le otorga obligaciones para la garantía de la protección de los bienes jurídicos de los niños, niñas o adolescentes, esto con el fin de prevenir la amenaza o la afectación de cualquier derecho de un niño, niña o adolescente

creando políticas públicas sobre ellos. Pero si por algún motivo se llega a vulnerar los derechos de cualquier niño, niña o adolescente, el Estado debe asegurar el efectivo restablecimiento de los derechos a las víctimas, si esto no se realiza, se incurrirá en responsabilidad penal (Ley 1098 2006, Art. 41).

3. Factores que influyen en los conflictos de adolescentes

Es necesario indagar sobre las conductas que influyen a que un adolescente cometa un delito, es decir, a saber, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a realizar un acto delictivo. Es por esto, que se va a desarrollar tres ítems los cuales nos ayudara a entender porque un menor de edad comete una infracción y así mismo poder ayudarlos a solucionarlos para que no exista una reiteración del delito.

3.1. Factor individual

Uno de los problemas principales que sufren los adolescentes se origina en el entorno familiar, ya que dentro de las vivencias familiares algunos pueden experimentar cierto aislamiento y abandono por parte de sus familiares, dificultando con esto la buena comunicación y convivencia (Hadechini, 2016, p . 14-15).

Por lo anterior, la falta de comunicación dentro del núcleo familiar afectan al niño, niña y adolescente provocando en el sentimientos de ira, este generado por el abandono al cual se ve sometido, es esta una de las razones por la que el niño, niña o adolescente busca actividades para poder olvidarse de su realidad, por lo que empiezan con el consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas lo que genera junto con la ira que empiecen a cometer actos delictivos (Acero, Escobar & Castellanos, 2007, p. 23-26).

Todos estos factores a los que están sometidos los menores de edad los acercan a cometer actos delictivos, además, es importante aclarar que la mayoría de los niños, niñas o adolescentes infractores han crecido en un entorno socio económico bajo, además en su núcleo familiar no solo se vive el abandono, sino que también los niños, niñas y adolescentes

están viviendo en continua violencia, por lo que las conductas que realizan las ven como cotidianas y no como ilícitas (Hadechini, 2016, p 15-16).

También los niños, niñas y adolescentes pueden ser más propensos a cometer delitos, cuando existe criminalidad en los padres, existe violencia intrafamiliar y en especial si la violencia va dirigida contra ellos, también cuando las familias son disfuncionales, numerosas o uniparentales y no tienen buenas técnicas de crianza, todas estas situaciones predisponen al niño, niña o adolescente para que cometa actos violentos como lesiones personales u homicidios entre otros delitos (Acero, Escobar & Castellanos, 2007, p. 43-45).

La comodidad dada por la vida fácil, hace que los menores no quieran cambiar ya que les gusta la inmediatez que pueden obtener en los actos delictivos, como lo es el dinero fácil consiguiendo por medio de hurtos, o la solución de un conflicto con otra persona llegando a lesiones personales y hasta el homicidio, de acuerdo a estadísticas realizadas por la Policía Nacional entre el primero de enero y el 28 de agosto de 2019 se detuvieron 9.659 menores de edad, entre ellos 7.114 son de 16 y 17 años y los 2.481 restantes son de 14 a 15 años (Pueyo, 2006, p. 52-55; Guerra, 2019, p. 3).

Se puede afirmar que los actos violentos que realizan los menores de edad están categorizados como conductas complejas, voluntarias y con un fin ya sea para beneficio propio o de alguien más, cabe mencionar que todos los actos delictivos realizados por niños, niñas o adolescentes son realizados por trastornos psicológicos causados por los maltratos, el abandono, el ejemplo dado por sus familiares, la vida socio económica en la que se encuentran y a causa de las sustancias psicoactivas que llegaran a consumir (Pueyo, 2006, p. 52-55).

Otros factores de riesgo que afectan a los niños, niñas y adolescentes y están asociados a un comportamiento delictivo son la baja inteligencia, esto asociado a la baja escolaridad que se observa en los niños, niñas y adolescentes, además de las malas relaciones que tienen con sus compañeros tanto dentro como fuera de la escuela, estrés familiar provocando depresión y conflictos dentro del núcleo familiar, estar sometido a críticas por parte de sus familiares generando así sentimientos negativos y por ende produciendo un aislamiento social

provocando que en la vida adulta o en su adolescencia estos estén más propensos a cometer delitos (Hein, S.F., p. 35-40).

3.2. Factor social

Existen varias teorías que tratan de explicar el delito, algunas de estas teorías ponen como centro el aprendizaje, donde los niño, niñas y adolescentes aprende el comportamiento delictivo, es decir, que el delito proviene de un proceso de socialización por lo que las personas se vuelven delincuentes bajo la influencia principalmente de su familia o amigos porque estos tienden a imitar el comportamiento de las personas que frecuentan, por lo tanto los niños, niñas y adolescentes asimilan estas conductas como buenas y no como actos delictivos (Hadechini, 2016, p 30-32).

Otra desventaja que tienen los niños, niñas y adolescentes y los llevan a cometer actos delictivos, es en cuanto al factor socio- económico y la falta de oportunidades laborales que tienen los menores de edad, es por esta carencia económica, que se genera depresión y estrés tanto en el niño, niña o adolescente como en los miembros de la familia, generando así que se aíslen unos con otros por la presión económica en la que viven, haciendo que la atención y el apoyo al niño, niña o adolescente sea casi nula, por lo que no se está pendiente del comportamiento y de los actos que comenten los niños, niñas o adolescentes para poder suplir sus necesidades (Hein, S.F., p. 41-44; Araya & Sierra, 2002, p. 20-23).

Teniendo en cuenta el problema socio-económico del cual hablamos anteriormente genera también que los niños, niñas y adolescentes no tengan acceso a la educación por la falta de recursos económicos o en los casos donde los niños, niñas y adolescentes que acceden a instituciones educativas de bajo rendimiento escolar generando un nivel educativo malo, porque no cuentan con autoridades necesarias dentro o fuera de la institución (docentes y padres), por lo cual no se mantiene ocupado al niño, niña o adolescente en actividades escolares para así prevenir la comisión de algún delito (Hadechini, 2016, p 33-35).

3.3. Factor de inclusión

La inclusión es un elemento importante en las relaciones sociales de hoy en día, es por esto que con la Declaración de los Derechos de los Niños se empezó a ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos con capacidad de decisión, por lo tanto se pudieran tener una integración a la sociedad satisfactoria por medio de la educación y el trabajo, pero además para los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley es mucho más importante que la inclusión sea efectiva y de forma permanente, ya que esto ayuda a la no reiteración de los delitos (Hadechini, 2016, p 43-45).

Después que el niño, niña o adolescente cumpla con la sanción impuesta por sus actos delictivos, se busca el bienestar de este ayudándolo en su inclusión a la sociedad con acciones que ayuden al desarrollo físico, psicológico, intelectual y moral del niño, niña y adolescente, además, también se busca la reparación del daño causado a la víctima del acto delictivo (Sarmiento, 2008, p 68-69).

Esta integración se lleva a cabo mediante instituciones de reforma, las cuales ayudan principalmente a reparar las relaciones dañadas ya sea de forma parcial o total con la familia y con las instituciones educativas, luego de ayudar a fortalecer las relación entre el niño, niña o adolescente y su familia, se empieza a reconstruir la identidad del niño, niña o adolescente y a lograr que este sepa interactuar con los demás, todo esto bajo un conjunto de valores que le ayudan a fortalecer lazos con los demás que lo rodean (Morente & Sánchez, 2009, p. 39-41).

4. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), es el conjunto de principios, normas, instituciones, actividades y procedimientos especiales que rigen las investigaciones y el juzgamiento de adolescentes entre 14 y 18 años que hubieran cometido algún tipo de delito, teniendo en cuenta que el niño, niña o adolescente infractor de la Ley tiene el derecho

a la rehabilitación y reintegración a la sociedad como se ha mencionados en todo el artículo (CSJ, 2008, p. 5-9).

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes propone un cambio para tener una nueva comprensión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y que sean visto como ciudadanos activos e implementa la corresponsabilidad por parte de la familia, la sociedad e instituciones del Estado (Convenio 661, 2013, p. 5-6).

Además, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene carácter abierto, esto quiere decir que debe proporcionar procesos de retroalimentación, entre las entidades que lo integran esto con el fin de poder interactuar de forma eficaz y constructiva con otros sistemas en especial con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (CONPES 3629, 2009, p. 26).

Este sistema sirve para que los adolescentes que se consideran imputables con un especial tratamiento, respondiendo penalmente por actos delictivos, esto quiere decir, que se debe garantizar el debido proceso a los niños, niñas y adolescentes permitiendo que estos se hagan responsables de sus actos, por medio del cumplimiento de sanciones pedagógicas, protectoras y restaurativas (CSJ, 2008, p. 5-9).

Toda actuación de este sistema debe atender la prevención de conflictos, es decir, para que los adolescentes no incurran en un acto delictivo se les deben garantizar todos los derechos de manera eficaz, además, se debe brindar una atención restaurativa, reparadora y transformada, para que los adolescentes tomen conciencia sobre la conducta delictiva que cometieron y las consecuencias, reparar a la víctima y a la comunidad y se realizan actividades donde se involucren a las familias, comunidades e instituciones todo esto con el fin que se dé la inclusión social de la que ya se ha hablado anteriormente (Convenio 661, 2013, p. 5-7).

4.1. Autoridades y entidades del SRPA

Con el fin de dar atención integral a los adolescentes existen autoridades y entidades que participan dentro del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, para que el objetivo de este se cumpla, estas son:

- ✓ **Policía Nacional.** El departamento encargado para estos casos es el cuerpo de policía de infancia y adolescencia y está encargado de la captura de los adolescentes infractores de la Ley penal y estos deben garantizar el respeto hacia los adolescentes mientras se adelanta todo el proceso (Audiencias, además son los encargados de trasladar a los niños, niñas y adolescentes a las instalaciones judiciales donde sea necesario su presencia con el fin de dar continuidad al proceso o para sitios por atención de salud si esto es necesario (Ley 1098 de 2006).
- ✓ **Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses (INMLCF).** Esta encargado de prestar los servicios médicos – legales y de ciencias forenses que sean solicitados por alguna de las partes dentro del proceso penal. Dentro de esta institución se practican todas las pruebas periciales y exámenes forenses necesarios y se verifica las pruebas realizadas por otros organismos (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 137-141).
- ✓ **Fiscalía General de la Nación (FGN).** Son los encargados de la investigación de la posible comisión del delito por parte de un adolescente, debe presentar la acusación ante los jueces cuando su investigación confirme la comisión de delitos (Convenio 661, 2013, p. 25-26).
- ✓ **Procuraduría General de la Nación (PGN).** Su función dentro de estos procesos es velar por los derechos de todos los involucrados no solo los del niño, niña y adolescente infractor (CSJ, 2008, p. 10-11).

- ✓ **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).** El ICBF es una de las entidades que tienen un gran papel dentro de los procesos con niños, niñas y adolescentes ya que es el encargado de los lineamientos técnicos para la ejecución de los métodos pedagógicos, los planes de desarrollo para los adolescentes infractores teniendo en cuenta el ciclo de vida, la garantía y el restablecimiento de sus derechos. (CONPES 3629, 2009, p.17-25).

Dentro de los procesos penales con niños, niñas y adolescentes, el ICBF cuenta con el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), las Defensorías de Familia quien está presente en todas las actuaciones del proceso para garantizar los derechos del niño, niña y adolescente y hacer seguimiento de este mientras cumplan las sanciones impuestas, las Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía estos son para las regiones que no cuentan con Defensor de Familia y equipos técnicos los cuales están conformados por psicólogo, trabajador social y nutricionista y son los encargados de evaluar al niño, niña y adolescente y hacer un seguimiento de este (CONPES 3629, 2009, p.17-25).

- ✓ **Defensoría del Pueblo (DP).** Este provee a los niños, niñas y adolescentes con servidores públicos que los represente dentro del proceso que se va adelantar si la familia de este no tiene los medios para pagar honorarios a un abogado. El defensor se encargará de realizar las actuaciones para probar la inocencia del niño, niña y adolescente o procura que la sanción sea acorde al delito cometido (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 137-141).

- ✓ **Órganos Judiciales.** Entre estos órganos se encuentran los jueces de control de garantía que se encargan de verificar la legalidad de las actuaciones de los fiscales y la policía judicial solo se encuentran en la fase de indagación e investigación, los jueces de conocimiento evalúan desde la formulación de acusación o para la solicitud de preclusión si se llega a dar y es el encargado de determinar si el niño niña o adolescente es responsable o no de los delitos imputados y si determina la responsabilidad está encargado de controlar la ejecución de la sanción, los Tribunales

Superiores del Distrito Judicial en sus salas penales y de familia estos conocen los recursos de apelación interpuesta contra las providencias del juez de conocimiento y la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal éste conoce el recurso extraordinario de casación y las acciones de revisión en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 137-141).

4.2. Código de infancia y adolescencia

La Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, es un código jurídico que establece las normas de protección de los niños, niñas y adolescentes, su objetivo es garantizar un desarrollo integral en el seno de la familia y de la sociedad, este código también es una respuesta a los planteamientos que se establecieron en el Convenio Internacional de derechos de los niños y asume la tendencia sobre la justicia restaurativa, es decir, que sus medidas son de carácter pedagógico, específico y diferenciado del sistema penal de los adultos (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 142-143).

Este código además tiene en cuenta los principios que brinda la Constitución Política de Colombia, los cuales son el principio a la protección integral que es el que les da el reconocimiento a los niños niñas y adolescentes como sujetos de derechos y obligaciones, el interés superior que da prevalencia a los niños, niñas y adolescentes sobre los adultos, la corresponsabilidad del estado, la familia y la sociedad (Constitución Política, 1991).

4.2.1. Diferencias entre el régimen anterior y el actual.

El Código del Menor el cual esta expedido por el Decreto 2737 de 1989 el cual se encuentra influenciado por el paradigma de la situación irregular el cual se explicó anteriormente, donde el niño, niña y adolescente se ubicaba como inimputable porque este no era considerado capaz de comprender la ilicitud de la conducta cometida, porque no tienen madurez sicológica (Holguin, 2010, p. 298).

Mientras que la ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia es un avance en los temas que conciernen a los niños, niñas y adolescentes con esta ley se adapta una política pública superando así a la legislación anterior donde se regulaba las denominadas situaciones irregulares, por eso, esta nueva ley viene a proteger a todos los niños, niñas y adolescentes y no solo a los que se encuentran dentro de una situación irregular, además implementa las responsabilidades de la familia, la sociedad y el estado (CSJ, 2008, p. 5-9).

Una de las principales diferencias entre el Decreto 2737 de 1989 y el Actual Código de Infancia y Adolescencia es que en el Decreto 2737 se trataba al niño, niña y adolescente con discriminación ya que se consideraba, como un ser inferior, incapaz e inimputable, mientras que en la Ley 1098 estos son considerados por igual y podían ser imputados (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 84-96).

Es decir que para el Decreto 2737, los niños, niñas y adolescentes que delinquirían deberían ser protegidos como un sujeto pasivo en condiciones irregulares (problemas familiares y sociales), mientras que en la Ley 1098 ya el niño, niña y adolescente se ve como un sujeto de derechos y obligaciones por lo que debe responder por el daño infringido a las víctimas por medio de sanciones (CSJ, 2008, p. 5-9; Holguin, 2010, p. 298-299).

Para el Decreto 2737, la protección se daba a los niños, niñas y adolescentes que se encontraran dentro de una situación irregular pero la responsabilidad penal era para niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años, pero para la ley 1098 la protección es para todos los niños, niñas y adolescentes en general, pero la responsabilidad penal es para niños, niñas y adolescentes entre 14 y 18 años de edad, es así como los dos códigos dejan un vacío sobre cuál era el proceder para niños, niñas y adolescentes infractores de la ley, que fueran menores de 12 años para el código del menor y menores de 14 para el código de infancia y adolescencia (Holguin, 2010, p. 85-93).

Una de las grandes diferencias entre los dos regímenes es que en el Código del menor se aplicaba un sistema inquisitivo y para el Código de Infancia y Adolescencia se aplica un sistema acusatorio, es decir, en el primer sistema el juez es el encargado de investigar, juzgar

y controlar la medida impuesta, mientras que en el segundo sistema el fiscal es el encargado de investigar y el juez impone la medida correspondiente, en este proceso se tiene en cuenta los principios de oralidad, inmediación. Controversia probatoria e igualdad, posteriormente el juez de conocimiento es el encargado de juzgamiento y seguimiento de la sanción (CSJ, 2008, p. 5-9).

Para la Ley 1098 la víctima puede participar en todo el proceso y se le reconocen todos sus derechos, en cambio en el Decreto 2737 el único sujeto del proceso era el niño, niña y adolescente, además, para el Decreto 2737 solo eran considerados la prevalencia de los niños, niñas y adolescentes sin considerar el tipo de delito, pero para la Ley 1098 la gravedad del delito es importante por lo que se da una sanción al niño, niña y adolescente proporcionado a su acto teniendo en cuenta la prevalencia de sus derechos (CSJ, 2008, p. 5-9).

Las sanciones o medidas correctivas para el Decreto 2737 eran, la amonestación al niño, niña y adolescente y a las personas de quien dependía; imposición de reglas de conducta; libertad asistida; ubicación institucional y cualquier otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor de edad (Decreto 2737, 1989, Art. 204).

Por último, las sanciones que impone la Ley 1098 son, la amonestación; la imposición de reglas de conducta; prestación de servicios a la comunidad; libertad asistida; internación en medio semi-cerrado y la privación de libertad en centro de atención especializado, se puede observar que se mantuvieron casi todas las medidas que establecía el Decreto 2737 pero para mejorar la rehabilitación del niño, niña y adolescente se agregaron otro tipos de medidas y estas serán explicadas a detalle más adelante (Ley 1098: 2006, Art. 162).

4.3. Exclusión de la responsabilidad

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 en su artículo 142, no son sujetos de responsabilidad penal los niños y niñas que sean menores de 14 años, los niños niñas y adolescentes que tengan entre 14 y 18 años que se encuentren en situación de discapacidad psíquica o mental. En la misma ley se explica que para los niños, niñas y adolescentes que

incurran en conductas delictivas solo se le aplicará medidas de verificación de garantías de derechos y de restablecimiento, además, se deberá vincular a procesos de educación y protección dentro del ICBF (Ley 1098, 2006, Art. 143).

Para los niños, niñas ya adolescentes entre los 14 y 18 años con algún tipo de discapacidad psíquica o mental no solo los excluyen de la responsabilidad, si no que su exclusión es de todo el sistema penal, pero cabe mencionar que para los niños y niñas menores de 14 años que por la ley 1098 no tienen responsabilidad penal, podrán ser sometidos a medidas de verificación como sanción por la comisión de un acto delictivo, por otro lado se debe aclarar que si existen serias evidencias del compromiso del niño o niña menor de 14 años en el delito se deberá remitir copia a las autoridades de protección y restablecimiento del derecho lo que da a entender que existen jueces especializados que se encargan de casos donde el infractor es menor de 14 años (Moya & Bernal, 2015, p.46).

4.4. Procedimiento penal

El procedimiento penal de niños, niñas ya adolescentes es muy similar al proceso penal de los adultos salvo algunas garantías precisas para los niños, niñas y adolescentes, puesto que de acuerdo con el Acto Legislativo 03 de 2002, el proceso acusatorio tiene tres etapas la de indagación, investigación y la de enjuiciamiento y posteriormente una cuarta etapa para el seguimiento de la sanción si la sentencia es condenatoria.

El proceso penal inicia cuando el niño, niña o adolescente es capturado ya sea en flagrancia o por una orden judicial y es puesto a disposición de la policía de infancia y adolescencia y es llevado al CESPFA o un centro transitorio hasta que se realicen las audiencias preliminares. En la audiencia de imputación se le da asesoría por un abogado y la posibilidad de allanarse a cargo, si se da el allanamiento se da fecha para la audiencia de imposición de la sanción y lectura de fallo, si por el contrario no existe allanamiento se procede adelantar la investigación correspondiente y esta estará a cargo del fiscal quien determinará si existe preclusión de la investigación o se formula una acusación, si se llega a dar la preclusión el niño, niña o adolescente debe ser integrado a su familia y se da fin al proceso, pero si por el

contrario se formula la acusación se debe celebrar la audiencia de formulación de la acusación, finalizada dicha audiencia se da inicio a la audiencia preparatoria del juicio donde se debe determinar una sanción o se absuelve al adolescente, cuando se da la sanción puede convocar a una audiencia para la lectura del fallo pero si se absuelve al niño, niña y adolescente será integrado a su familia (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 84-119).

Cabe mencionar que en los delitos querellables que se encuentran establecidos en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, estos delitos tienen como requisito de procedibilidad la conciliación, si llega haber un acuerdo total el proceso penal no se inicia y se archivan las diligencias.

Para finalizar se puede concluir con que el proceso penal donde el sujeto infractor es un niño, niña o adolescente entre los 14 y 18 años de edad, se ordenó por parte de la Ley 1098 en su artículo 158 donde se dispone que los niños, niñas y adolescentes no podrán ser juzgados si se encuentran ausentes, pero esto no quiere decir que no se pueda realizar las investigaciones pertinentes para el caso en concreto, se podrá adelantar el proceso hasta la acusación donde se tendrá que suspender hasta que el niño, niña o adolescente comparezca (Moya & Bernal, 2015, p.63- 70).

4.4.1. Autoridades del Proceso Penal

- ✓ **Juez de Control de Garantías.** Es el encargado de proteger los derechos de los adolescentes y es el que autoriza y legaliza las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial (CSJ, 2008, p. 10).
- ✓ **Juez de Conocimiento.** Es el encargado de llevar el juicio oral y dicta la sentencia y determina la sanción correspondiente (CSJ, 2008, p. 10).
- ✓ **Fiscal.** Es el que se encarga de la investigación, la imputación, la acusación y debe garantizar la cadena de custodia (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 137-141).

- ✓ **Defensor.** Es el que asiste a los adolescentes durante todo el proceso, debe diseñar y ejercer la defensa técnica (CSJ, 2008, p. 10).
- ✓ **Defensor de Familia.** Acompaña al adolescente en todas las etapas del proceso y debe realizar un estudio socio familiar al adolescente el cual debe presentar al juez de conocimiento antes de la imposición de la sanción (Ministerio de justicia y del derecho, 2015, p. 137-141).
- ✓ **Ministerio Público.** Está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales, el que representa a la sociedad, vigilando y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, verifica el debido proceso (Sarmiento, 2008, p.58).

4.4.2. Audiencias Preliminares

- ✓ **Audiencia de Legalización de Captura.** En esta audiencia interviene la Fiscalía, el adolescente, su representante legal, la defensa, la Defensoría de Familia y el Ministerio Público, el juez determina si se cumplieron con los requisitos que exige la ley 906 de 2004 en su artículo 297, para la realización de una captura y si estos requisitos son cumplidos se legaliza, si no se cumplen se ordenara la libertad inmediata del adolescente (CSJ, 2008, p. 11-12).
- ✓ **Audiencia de Formulación de Imputación.** En esta audiencia puede presentarse varias situaciones la primera es que se declare la imputación, la segunda es la aceptación de la imputación, es decir, el adolescente se allanó a los cargos, la tercera situación es que se declare la contumacia, por la no concurrencia del adolescente o el abogado (CSJ, 2008, p. 11-12).

- ✓ **Audiencia de Solicitud, Modificación o Revocatoria de la medida de Internamiento Preventivo.** En esta audiencia interviene el Fiscal, el adolescente con su representante legal, la defensa y la Defensoría de Familia, pero es obligatoria la asistencia del Ministerio Público si en la audiencia se está solicitando la revocatoria. El juez tiene dos opciones: la imposición inmediata de la medida o la revocatoria o sustitución de la medida (CSJ, 2008, p. 11-12).

4.4.3. Audiencias de Conocimiento

Las audiencias de conocimiento se realizan ante un juez de conocimiento y se realiza posteriormente a la investigación y a la formulación de la acusación.

- ✓ **Audiencia de Formulación de Acusación.** El Fiscal es el encargado de hacer la acusación, indicar los hechos y las pruebas con esta información el abogado defensor puede preparar su defensa (CSJ, 2008, p. 11-12).
- ✓ **Audiencia Preparatoria.** En esta audiencia la defensa descubre las pruebas que tiene y se definen qué pruebas se practicarán durante el juicio, además, se les da la oportunidad a las partes de rechazar o inadmitir los medios de las pruebas por considerarlos ilegales, impertinentes o inútiles. El adolescente puede aceptar los cargos siempre y cuando esta declaración sea libre, consciente y con conocimiento de las consecuencias, si se prueba esto se dicta sentencia donde se impone la sanción (CSJ, 2008, p. 11-12).
- ✓ **Juicio Oral.** En esta se debe practicar las pruebas, las partes expresan sus argumentación y alegatos y el juez toma la decisión si se da fallo condenatorio se dictará fecha para la lectura del fallo (CSJ, 2008, p. 11-12).

4.5. Sanciones

Es importante que para los niños, niñas y adolescentes se les fomente su bienestar es por esto que las recomendaciones dadas por la Convención de Derechos del Niño y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores “Reglas de Beijing”, teniendo en cuenta estas reglas, el Código de Infancia y Adolescencia establece unas sanciones adecuadas para los niños, niñas y adolescentes (Sarmiento, 2008, p. 97 - 113).

Cabe mencionar que las sanciones que se encuentran consagradas en la Ley 1098 de 2006 no tiene la calidad de pena ya que su finalidad y función son distintas a la pena, pues las sanciones de la Ley 1098 son de carácter educativo y restaurativa (Ruiz, 2011, p. 352-355).

Una de las sanciones más extrema es la privación de la libertad en esta se debe tener en cuenta tres tipos de análisis, la primera se contempla cuando es una pena no menor de seis años de prisión en el tipo penal, además se debe tener en cuenta que la pena debe ser apropiada para la rehabilitación en concursó con su familia y por último se debe tener en cuenta la gravedad del delito y las circunstancias, como las medidas de la ley nacional e internacional que justifiquen una medida tan extrema como la privación de la libertad (Moya & Bernal, 2015, p.47-52).

4.5.1. Clases de sanciones

- ✓ **Amonestación.** Según el artículo 183 del Código de Infancia y Adolescencia es una recriminación que hace la autoridad judicial a un adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la reparación del daño (Ley 1098, 2006, Art.183).

En esta sanción se debe asistir a un curso que se dictan en dos talleres y trata sobre Derechos Humanos y convivencia ciudadana, estos talleres se encontrarán a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, esto con el fin de que el niño, niña o adolescente tome conciencia sobre la conducta que cometió y las consecuencias que trae

este tipo de hechos, además exhorta al pago de perjuicios tanto al niño, niña y adolescente como a los padres (Convenio 661, 2013, p. 19-25).

- ✓ **Imposición de Reglas de Conducta.** Las autoridades judiciales imponen al adolescente, obligaciones o prohibiciones para regular el modo de vida además de promover y asegurar una formación adecuada, esta sanción no debe superar los dos años (Ley 1098, 2006, Art.183).

Es necesario que las autoridades determinen las obligaciones y prohibiciones que requiere el niño, niña o adolescente para lograr regular su modo de vida, esto bajo el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las medidas que pueden prohibir es frecuentar algunos lugares o convivir con algunas personas determinadas, esto con el fin de que no incurra en reincidencia del delito; también se le puede imponer la obligación de participar en programas de formación laboral, cultural, sexual, prevención de la drogadicción o asistir a terapias familiares o una terapia psicológica, dependiendo de las necesidades que el niño, niña y adolescente tenga para regular su modo de vida (Sarmiento, 2008, p. 101-112).

- ✓ **Prestación de Servicios a la Comunidad.** Es la realización de trabajos de interés general que debe realizar el niño, niña o adolescente de forma gratuita para poder remediar los daños ocasionados por la comisión de hechos delictivos, pero se prohíbe hacer cualquier tipo de trabajo que sea peligroso para el niño, niña y adolescente o que sea nocivo para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social como lo establece el artículo 184 de la Ley 1098 de 2006, esta sanción no puede superar los seis meses (Convenio 661, 2013, p. 19-25).

Esta medida constituye una herramienta importante para que el niño, niña y adolescente tenga una oportunidad constructiva y proactiva de reparar los daños que cometió, mejorar la perspectiva que tiene sobre el mismo y su valor social y luego integrarse a la sociedad (Sarmiento, 2008, p.101-112).

- ✓ **Libertad Asistida o Vigilada.** Es cuando se le da la libertad al niño, niña o adolescente por parte de la autoridad judicial correspondiente, pero esta libertad está condicionada obligatoriamente de someterse a la supervisión, asistencia y orientación de un programa de atención especializada, esto está establecido en el artículo 185 de la Ley 1098, además, esta medida no puede superar los dos años (Convenio 661, 2013, p. 19-25).

Con esta medida se busca la oportunidad de lograr los objetivos pedagógicos y de reparación de víctimas, además de evitar daños al niño, niña y adolescente por la institucionalización, es un servicio que ofrece que el niño, niña o adolescente tenga por lo menos 10 actividades al mes, las cuales están desarrolladas para que las elabore de forma individual o familiar, dependiendo de las necesidades de apoyo que tiene cada adolescente (Sarmiento, 2008, p. 101-112).

Esta medida de libertad vigilada tiene una finalidad protectora, educativa y restaurativa, buscando fortalecer la capacidad de actuar reconociendo las consecuencias y responsabilidades que atrae sus actos, también ayuda al niño, niña y adolescente a tener la capacidad de respetar los derechos de los demás y la reparación por los actos cometidos (ICBF, 2007, p. 11-14).

- ✓ **Medio Semi-cerrado.** Se vincula al niño, niña y adolescente a un programa especializado donde deberá asistir de forma obligatoria durante un horario el cual no será escolar o en fines de semana, esta sanción no podrá ser superior a tres años (Ley 1098, 2006, Art.186).

Esta medida implementa un servicio de externos, pero se ha implementado un sistema internado no privativo de la libertad para los niños, niñas y adolescentes que no cuenten con un apoyo familiar que les brinde las condiciones mínimas para su desarrollo. Esta medida se puede cumplir por un internado abierto que es en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes que no tengan apoyo familiar, tiene una atención de 24 horas, pero no es privativo de la libertad; el seminternado tiene una jornada de atención de 8 horas. Los niños, niñas y adolescentes en esta medida viven con su familia y asisten a las jornadas para el cumplimiento de la sanción impuesta por el juez y en esta jornada se

realizan modelos pedagógicos alternos y aprobados por la Secretaría de Educación ya que estos jóvenes se encuentran sin estudiar en un centro de aprendizaje y por último el Externado, consiste en una jornada de 4 horas diarias sin interrumpir con las actividades escolares (Sarmiento, 2008, p. 101-112).

- ✓ **Privación de la libertad.** Es toda forma de internamiento, en establecimiento público o privado, que es ordenado por una autoridad competente, del que no se autoriza al adolescente a salir por su propia voluntad, esta medida se aplica para mayores de 16 años y menores de 18 que sean hallados responsables de delito con pena mínima de seis años, para estos casos el niño, niña y adolescente podrá ser privado de su libertad por un tiempo de 1 a 5 años, según el artículo 187 de la Ley 1098 (Convenio 661, 2013, p. 19-25).

La Ley de Seguridad Ciudadana introduce una salvedad para los niños, niñas y adolescentes de 14 a 18 años de edad que se encuentren responsables de delitos como el homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos agravados contra la libertad integridad o formación sexual, la privación de libertad será de 2 a 8 años de prisión sin ningún beneficio para reducir la condena (Convenio 661, 2013, p. 19-25).

5. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes en América Latina

Cada jurisdicción debe configurar las normas internacionales para que resulten eficaces y coherentes con el contexto de la sociedad, donde se va a establecer, por lo que es notable que para cada jurisdicción asigna la edad correspondiente para la responsabilidad penal en los adolescentes. por esto la ONU propone un modelo de justicia restaurativa, configurándose como una alternativa para la solución de conflictos por la realización de un acto que va en contra de la ley y además, es cometido por un niño, niña o adolescente, por lo que para esta justicia restaurativa se debe considerar las condiciones socioculturales, las necesidades y los derechos tanto de la víctima como del infractor, además que establece sanciones con la finalidad de prevenir la reincidencia del niño, niña y adolescentes (Brito, Ordoñez & Díaz, 2006, p. 62-71).

Para poder tener una comprensión más acorde sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, además, de ver el desarrollo y la aplicación de los modelos penales utilizados se describe algunos sistemas de justicia en América Latina.

5.1. Argentina

Las políticas establecidas por Argentina frente a los conflictos de adolescentes con la ley penal son primero contemplar los aspectos que ayudan a la prevención del delito y segundo la regulación adecuada de mecanismo de reacción, si se llegara a cometer el delito, teniendo como fin la no reincidencia y generará la inclusión del niño, niña y adolescente a la sociedad (Hadechini, 2016, p 47-49).

Argentina desarrollo por medio de la Ley N° 10.903 de 1919 (Patronato de Menores), un sistema de intervención y aislamiento de los niños, niñas y adolescentes, donde se les brindaba intervención a los niños, niñas y adolescentes y a la familia de ellos, con la finalidad de separar los factores de riesgos para generar un cambio en los niños, niñas y adolescentes, esta norma no resultó bien al momento de intentar realizar la inclusión social puesto que limitaba la interacción de los niños, niñas y adolescentes con su familia y su alrededor (Ley N° 10.903, 1919).

En el año 2006, se creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) el cual era un órgano especializado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hacía parte del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 416 de 2006 el Poder Ejecutivo estableció su dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que la intervención de las entidades reguladoras sea de manera rápida y eficaz. Una de las novedades de esta normatividad fue la inclusión de las provincias de Argentina para determinar las diferentes realidades dentro del país y así poder atender de manera eficiente las necesidades y se disminuyó la sentencia de privación de libertad para los menores de edad (Decreto N° 416 de 2016).

El sistema penal de Argentina intenta implementar la libertad asistida, la restitución de los derechos y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes inmersos en las conductas punibles, además, se ve al niño, niña y adolescente como un actor importante dentro de la sociedad, el cual debe cambiar mediante actividades pedagógicas y acompañamiento para prevenir las conductas delictivas (Hadechini, 2016, p 47-50).

Para concluir se puede decir que el sistema de responsabilidad penal argentino hace un cambio con la creación de la SENNAF como ente que regula y protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes infractores, cambiando de una intervención paternalista y represiva a una intervención integrativa que ayuda con los entornos importantes para cada niño, niña y adolescentes que se encuentra violando la ley, logrando por medio de la educación, acompañamiento y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para una mejor situación social como individual con el fin de dar la inclusión social (Hadechini, 2016, p 47-50; Brito, Ordoñez & Díaz, 2006, p. 62-71).

5.2.Chile

Para Chile la ley que regía la justicia para los niños, niñas y adolescentes era la Ley de menores (Ley N° 16.618 de 1968), era la ley que se le aplicaba a los menores de 16 años y a los adolescentes de 16 a 17 años y las medidas aplicadas para estos jóvenes eran para su protección. Además, los niños, niñas y adolescentes eran sometidos a un proceso judicial ante un juez de menores para determinar si tenían o no capacidad de discernimiento y los adolescentes de 16 y 17 años que eran considerados con esta capacidad eran sometidos bajo las mismas condiciones del proceso de los adultos (LANGER, 2014, p. 24-31).

Después de la implementación de la Convención de los Derechos de los Niños y las estipulaciones dadas por la ONU para la protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo que Chile empieza adoptar las reglas de la Convención de derechos del niño, por lo que se cambia la judicialización de los niños, niñas y adolescentes y también las leyes y políticas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, esto con el fin de adecuarla a la Constitución Política y la Convención de los Derechos del Niño y demás reglas

internacionales que se encontraran vigentes en Chile para el momento (Berrio, 2011, p. 46-52).

Por medio de la normatividad juvenil, busca fortalecer el respeto por la comunidad, mediante sanciones educativas y sanciones que no coacciones la integración social y como última instancia la implementación de la privación de la libertad estas sanciones tienen el fin de fomentar conciencia en los niños, niñas y adolescentes para que no cometan delitos (Berrio, 2011, p. 46-52).

Chile hace una diferenciación entre la judicialización de los niños, niñas y adolescentes y la de los adultos, pues se busca disminuir los efectos sociales para los niños, niñas y adolescentes, para este efecto se buscan sanciones que permitan la educación de los estos y así evitar la reincidencia de los niños, niñas y adolescentes, teniendo como último recurso la privación de libertad, mientras que a los adultos se intenta apartarlos de la sociedad para lograr un a prevención (Hadechini, 2016, p 51-54).

Las Sanciones que implementa Chile son de libertad asistida o vigilada, servicio en beneficio de la comunidad, órdenes de supervisión y la privación de libertad como último recurso, para este cumple con normas de separación de los niños, niñas y adolescentes de los adultos, para poder brindarles entornos favorables y no se les vulnere ningún derecho y a diferencia con Colombia, Chile cuenta con sanciones económicas o reparación del daño (Berrio, 2011, p. 46-52; Brito, Ordoñez & Díaz, 2006, p. 72-78).

Se puede concluir que Chile, ha tenido avances en lo que concierne a la reparación del daño, teniendo la obligación de resarcir a la víctima por cualquier perjuicio ocasionado por la realización el acto punible, esta reparación se puede hacer por medio económico, o por restitución del objeto de la infracción o un servicio no remunerado (Cámara Arrollo, 2011, p. 7-13).

5.3. México

Después de la Convención de Derechos de los Niños, México realiza modificaciones a la Constitución, para poder estructurar la judicialización de los niños, niñas y adolescentes mediante la rehabilitación y la asistencia social y la privación de libertad para los niños, niñas o adolescentes de 12 a 18 años de edad, por lo que los menores de 12 años solo serán sujetos a la rehabilitación y asistencia social (Brito, Ordoñez & Díaz, 2006, p. 80-85).

Ante la jurisdicción mexicana los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, pero para los casos penales se tiene en cuenta su inmadurez, inexperiencia y debilidad, esto logra que los niños, niñas y adolescentes se hagan cargo de su responsabilidad por la comisión de delitos pero que esta responsabilidad se realiza bajo reglas especiales que ayuden con su condición de niño, niña o adolescente y respeten su crecimiento (Aguilar, 2005, p. 32-36).

México cuenta con una problemática frente al rango de edad para el reconocimiento de los adolescentes o niños, pues para algunos estados de México como Aguascalientes, fijan la edad mínima a los 8 años y en Oaxaca la establecieron en 11 años, esto se presentó por el ámbito interno de cada Estado y porque en la Convención de Derechos del Niño no se estipuló una edad, solo dejaron un límite normativo frente a la pena de muerte para los menores de 18 años (Aguilar, 2005, p. 32-36).

Por lo anterior México por medio de la Constitución, estableció la edad de entre 12 a 18 años, y toma como medida la no judicialización de los delitos cometidos por menores de 12 años, dejándolos absueltos de castigos, pero volviéndose importante la asistencia de tutores o padres de los niños, niñas y adolescentes (Hadechini, 2016, p. 55-57; Brito, Ordoñez & Díaz, 2006, p. 80-85).

Al igual, que Argentina, Chile y Colombia, México toma como última instancia la privación de la libertad para niños, niñas o adolescentes, considerando que no es buena para la reeducación de los niños, niñas y adolescentes, porque esto no le ayuda a que este respete las normas y los derechos de los demás (Hadechini, 2016, p. 55-57).

6. Falencias dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Hadechini, se pudo observar que existen varias incongruencias entre lo que está establecido en las normas y la realidad que viven los jóvenes infractores, pues las instituciones no tienen un buen conocimiento sobre pedagogía, capacitación, vinculación familiar y el desarrollo de la vida, situaciones que desfavorecer al niño, niña o adolescente a la hora de encontrarse dentro del sistema de responsabilidad penal (Hadechini, 2016, p. 72-75).

Se debe tener en cuenta que el niño, niña o adolescente debe pasar por diferentes fases para llegar a la inclusión social la primera de estas es la fase personal, en esta el niño, niña o adolescente debe realizar un autoconocimiento, es decir, que el este debe comprender y reconocer el delito cometido y realizar una exploración personal. Es por esto que las instituciones realizan una división de los infractores según el delito cometido, pues se debe tener en cuenta que la delincuencia no es igual para todos, pues cada niño, niña o adolescente desarrolla su conciencia individual de manera diferente y esta conciencia es la que determina su forma de actuar (Chamboredon, 1971, p. 64-69).

Por esta razón se debe implementar procesos donde el niño, niña y adolescente pueda realizar el reconocimiento personal de manera más profunda, teniendo en cuenta las realidades que vive cada uno de los niños, niñas o adolescentes, esto se puede observar mejor con las etapas que presenta Berger y Luckmann, donde establecen la primera como la sociabilización del individuo, la segunda socialización dentro de la internalización de las instituciones y por último la identidad del niño, niña y adolescente (Berger y Luckmann, 1968, p. 35-39).

La segunda fase, es la familiar en esta fase se debe comprender y aceptar el pasado y el presente, para esta fase el ICBF plantea que la atención no se puede centrar sólo en limitar el tiempo, cuerpo y energías de los adolescentes, sino que el objetivo es educativo por medio de procesos de desarrollo personal con la participación de la familia. Pero en la realidad se puede ver que la participación de las familias es muy escasa y en algunos casos es nula, por

lo que esta fase no se está cumpliendo como lo planeado dentro del proceso de rehabilitación e inclusión social (ICBF, 2010, p. 12-15).

Como se pudo observar en el desarrollo del artículo, el núcleo familiar con el que el niño, niña o adolescente convive diariamente, es parte importante para lograr la inclusión social y la no reincidencia del delito, por lo que el sistema de responsabilidad penal debería enfocarse mucho más a los tutores brindándoles apoyo y acompañamiento durante todo el proceso, esto con el fin que los tutores tengan conocimiento sobre los procesos de educación que debe tener el niño, niña y adolescente, el adecuado entorno familiar en el que debe vivir el niño, niña o adolescente y la sana convivencia, además de explicarles las consecuencias que pueden existir si estos no tienen el acompañamiento necesario por parte de su familia para lograr la rehabilitación y por ende la inclusión social (Hadechini, 2016, p. 72-75).

La tercera y última fase es la grupal, se debe realizar procesos pedagógicos y terapéuticos que estén enfocados en restaurar la mentalidad de los jóvenes sobre su vida, es decir, que se les enseñe cómo acceder a recursos de forma legal, cómo manejar su tiempo, que realice actividades recreativas, culturales, deportivas entre otras esto con el fin de explorar sus talentos y así los puedan explotar y el adolescente cree un proyecto de vida (ICBF, 2010, p. 12-15).

Anteriormente se pudo observar las tres fases por las que pasa un niño, niña o adolescente infractor y se puede ver que existen algunas falencias entre la norma y la realidad que se vive diariamente en el país ya que las instituciones no están capacitadas para realizar una inclusión social de manera efectiva y esto se convierte en una gran problemática porque si no se les brindan los apoyos necesarios, el niño, niña o adolescente infractor puede reincidir en cualquier momento.

7. Conclusiones.

La normatividad colombiana a través de la historia ha sufrido varios cambios referentes a la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes pues en un principio estos no eran considerados como sujetos activos de derecho, por lo que el infanticidio era muy frecuente, posteriormente a esto la sociedad empieza a tener conciencia sobre los actos a través cometidos hacia los niños, niñas y adolescentes, es por esto que se empieza a considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos que necesitan protección y cuidado.

Es ahí cuando aparece la Constitución Política de Colombia, concediendo derechos Superiores a las personas menores de 18 años, considerando a estos como sujetos activos de derecho y dando el carácter de fundamental a todo lo que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes, después aparece el Código del Menor donde se deja a los niños, niñas y adolescentes como inimputables y como seres que necesitan protección y cuidado de los padres, sociedad y Estado.

Es hasta el año 2006, donde se estableció que los niños, niñas y adolescentes también podían cometer delitos y podrían tener responsabilidad sobre sus acciones, es decir, que se empieza a considerar a los niños, niñas y adolescentes como imputables ante la ley, por lo que se expide la Ley 1098 de 2006 bajo los parámetro internacionales de las Reglas de Beijing y la Convención de Derechos de los Niños, esta ley nació con el fin de proteger y controlar los delitos realizados por los niños, niñas y adolescentes y también restituir los derechos tanto a las víctimas como al infractor.

Ahora bien, con base en lo anterior se decidió crear un subsistema penal para poder garantizar el interés Superior con el que cuenta los niños, niñas y adolescentes y así tener un proceso penal diferente al de los adultos, implementado así la justicia restaurativa la cual implica que se realice un cambio en la conducta del niño, niña o adolescente, se repare a la víctima y se dé la inclusión social.

Cabe destacar que los niños, niñas y adolescentes tienen diferentes sanciones cuando son judicializados como responsables penalmente, estas son; la amonestación que es un llamado de atención de las autoridades y una mayor vigilancia y control de los padres hacia el niño, niña y adolescente, la imposición de reglas la cual implica que el niño, niña y adolescente debe cumplir con diferentes obligaciones y prohibiciones que el juez establezca necesarias, la prestación de servicios comunitarios de manera gratuita con el fin de resarcir los errores cometidos hacia la comunidad y la víctima, la libertad asistida es cuando el niño, niña y adolescente se encuentra libre pero debe someterse a supervisión y orientación por medio de programas de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, la sanción semi-cerrado que cumple la función de orientar al adolescente por medio de talleres y programas en esta sanción el niño, niña o adolescente debe cumplir un horario en el cual debe acercarse a la institución a la que lo asignen y por último la privación de libertad la cual es utilizada como último recurso y solo se aplica a los menores de 16 a 18 años.

No obstante, de la aplicación de todo lo que establece la ley para lograr que el niño, niña o adolescente mejore su calidad de vida y no caiga en la reincidencia del delito, la realidad es muy distinta, puesto que los procesos y políticas implementadas no son totalmente satisfactorias ya que se tiene demasiadas falencias que impide que se cumpla con la finalidad de estas medidas, pues el índice delincuencial y de reincidencia no ha bajado desde la implementación de la ley, aún hace falta que las instituciones cuenten con mejores instalaciones para así poder brindar de forma adecuada la restitución de los derechos y generar ambientes adecuados para que el niño, niña y adolescente cumpla con las determinadas sanciones que se le impongan.

Además, el Estado debería fomentar más la participación de la familia en el proceso, brindándole capacitación a estos sobre todo el proceso que tiene que vivir el niño, niña y adolescente para que no reincida, también brindar acompañamiento para que el niño, niña y adolescente pueda mejorar la relación con su núcleo familiar, y este no cometa los mismos errores que cometieron antes y por lo que los niños, niñas y adolescentes cometieron los actos delictivos.

8. Referencias

- Acero, A.; Escobar, F. & Castellanos, G. (2007). Factores de riesgo para violencia y homicidios juvenil. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. Volumen XXXVI, núm. 1. Asociación colombiana de psiquiatría. Bogotá D.C.
- Acosta, M. (2016). *De la Doctrina de la Situación Irregular a la Protección Integral: una aproximación crítica a los cambios en la orientación de la atención pública a la infancia y la adolescencia en Uruguay*. Universidad de la Republica. Uruguay.
- Acto Legislativo 03 de 2002. (2002, 19 de diciembre). El Congreso de Colombia. *Diario Oficial* N° 45.040.
- Acuña, F. (2008). *Módulo de responsabilidad penal del adolescente*. Bogotá D.C. ICBF.
- Aguilar, A. (2005). *El nuevo sistema de justicia para menores en México*. México: UNAM.
- Araya R. & Sierra D. (2002). *Influencia de los factores de riesgos sociales en el origen de conductos delincuenciales*. División de seguridad ciudadana. Ministerio de interior.
- Ariès, P. (1987). *El niño y la vida familiar en el antiguo régimen*. Madrid. Taurus.
- Berger, P. & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires.
- Berrio, G. (2011). “La ley de responsabilidad penal del adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”. *Política criminal*.
- Brito, D.; Ordóñez, J. & Díaz, I. (2006). *Justicia restaurativa una forma de transformación en integración social*. En F. Canté, & L. Ortiz, *Umbral de reconciliación, perspectivas de acción política no violenta*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Cámara Arrollo, S. (2011). *Justicia juvenil restaurativa: marco internacional y su desarrollo en América Latina*. *Revista de Justicia Restaurativa*.
- Cardozo, G. & Michalewicz, A. (2017). *El paradigma de la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: en la búsqueda de la plena implementación*. Publicado en: *Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia*. Número 82. ISSN 1851-1201.
- Chamboredon, J. (1971). *La délinquance juvénile, essai de construction d’objet*. *Revue française de sociologie* XII.
- Código Penal Colombiano (1837). Congreso de la Republica.
- Código Penal del Estado de Cundinamarca. Congreso de la Republica.

Consejo de la Judicatura Rama Judicial CENDOJ. (2008). ABC del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, esquema operacional y catálogo de audiencias. Serie Documento N° 8. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá D.C.

Constitución Política de Colombia. (1991). Congreso de la Republica.

Convenio N° 661 suscrito entre ICBF y OIM. El ABC del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA). Bogotá D.C.

Decreto 2737 de 1989. (1989, 27 de noviembre). Presidencia de la República de Colombia. Diario Oficial N° 39.080.

Decreto 416 de 2006. (2006, 17 de abril) Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N). Argentina.

Documento CONPES 3629. (2009, 14 de diciembre). Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá D.C.

Farias Carracedo, Carolina. (2013). Fundamentos y criticas del uso del término paradigma e materia de infancia. CDID Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Paraguay.

García Méndez, E. (1994). Derecho de la Infancia y adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección integral. UNICEF. Bogotá D.C.

García Méndez, E. (1998). Infancia. De los derechos y de la justicia. Buenos Aires.

García, M. & Carranza, E. (1990). Infancia, adolescencia y control social en América Latina: Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Venezuela. Primer informe de San José de Costa Rica. Ediciones Buenos Aires.

Guerra de la Espriella, María del Rosario. (2019). El fenómeno de la delincuencia juvenil. Publicado en el Congreso visible.org. Centro Democrático.

Hadechini Foliaco, D. (2016). SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN COLOMBIA: algunos vacíos en la aplicación de la medida de libertad asistida, desde la perspectiva de los adolescentes sancionados”. (Trabajo de grado). Universidad del Rosario.

Hein, A. (S.F.). Factores de riesgo y delincuencia juvenil: revisión de la literatura nacional e internacional. Fundación paz ciudadana.

- Holguín Galvis, G. (2010). Construcción histórica del tratamiento jurídico del adolescente infractor de la ley penal colombiana (1837-2010). Bogotá D.C.
- ICBF. (2010). Lineamiento técnico administrativo para la atención al adolescente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bogotá D.C.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. (2007). Lineamientos Técnico-Administrativos para la Atención de Adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal en Colombia. Versión 1.0.
- LANGER, M. (12 de 06 de 2014). Reforma a la justicia penal juvenil y adolescentes privados de libertad en Chile: Aportes empíricos para el debate. Política criminal. Vol. 9 N° 18 Santiago.
- Ley 10.93 de 1919. Patronato de Menores. Con las reformas del decreto ley 5286/57 y las leyes 23.737 y 24.286. Argentina.
- Ley 83 de 1946. (1946, 26 de diciembre). El Congreso de la Republica. Diario oficial N° 26363. Colombia.
- Ley 95 de 1936. (1936, 24 de abril). El Congreso de la Republica. Diario oficial N° 23316. Colombia.
- Ley 98 de 1920. (1920, 26 de noviembre). El Congreso de la Republica. Diario oficial N° 17440 y 17441. Colombia.
- Ley 1098 de 2006. (2006, 8 de noviembre). El Congreso de la República. Diario oficial N° 46.446. Colombia.
- Ley 10903 de 1919. (1919, 21 de octubre). Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N).
- Ley 16.618. (1968). Consejo Nacional de Menores. ORD. N° 5818. Chile.
- Ley 906 de 2004. (2004, 31 de agosto). Congreso de la República. Diario oficial N° 45.658. Colombia.
- Martínez Borre, J. (2015). Análisis de la responsabilidad penal para adolescentes a la luz de los esquemas filosóficos del delito. Bogotá D.C.
- Ministerio de Justicia y del Derecho. (2015). Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hacia la protección integral y la justicia restaurativa. Bogotá D.C.
- Morente, F. & Sánchez, M. (2009). Menores infractores en instituciones de reforma. Una mirada desde dentro. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis). Número 126,2009.

- Moya Vargas, M. & Bernal Castro, C. (2015). Los menores en el sistema penal colombiano. Bogotá D.C. Universidad Católica de Colombia.
- Pueyo, A. (2006). Violencia juvenil: Realidad actual y factores psicológicos implicados. Universidad de Barcelona. Grupos de estudios avanzados en violencia. Departamento de personalidad. Facultad de psicología. España.
- Sarmiento Santander, G. (2008). Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Bogotá D.C. Fiscalía General de la Nación.
- SCJN & UNAM. (2009). Justicia para Menores. Constitucionalidad de la ley de la materia del estado de San Luis Potosi. México.
- Vargas Prentt, Mariela. (2006). Breve estudio de la Nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia. Publicado en la Revista Justicia. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla.
- Zeledon, Marcela. (2015). EL CAMINO PARA CONVERTIRME EN NIÑO: Modelo Tutelar o de la Situación Irregular. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico”.